

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS Y PARA LA ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO.
DESPACHO DE LA MINISTRA. RESOLUCIÓN DM/Nº 017.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCIÓN DM/Nº 017/2012. MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. DESPACHO
DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/Nº 007-12.-
CARACAS, 9 DE FEBRERO DE 2011.

AÑOS 201° y 152°

Por cuanto, el Gobierno Bolivariano ha consolidado una clara política de protección al productor y la productora del campo venezolano, a los campesinos y campesinas de la Patria, reconociendo su papel protagónico en la garantía de la soberanía agroalimentaria del país y del derecho del acceso a una alimentación sana, suficiente y oportuna;

Por cuanto, es necesario apoyar la transformación de las relaciones sociales de producción en el campo, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades para el trabajo productivo de los campesinos y las campesinas, así como su organización, en aras del incremento de la eficiencia de los productores y productoras, y el mejoramiento de sus expectativas frente al esfuerzo de su trabajo tesonero;

Por cuanto, en la cadena de producción, transformación, distribución y comercialización del cacao, sus productos y subproductos, existen distorsiones provocadas por la conducta especulativa de los grandes capitales, que procuran una mayor ganancia sobre la base del detrimento del productor y la productora del campo, así como del consumidor final, creando situaciones de monopsonio en las cuales fijan reglas perjudiciales para la continuidad de la actividad productiva de cacao;

El Gobierno Bolivariano, responsablemente, ha venido manteniendo reuniones con el sector cacaotero venezolano, a fin de determinar los costos justos de producción de este rubro y su disponibilidad para las grandes empresas procesadoras, detectando la tendencia en estas grandes empresas a manipular a su conveniencia el precio del cacao en grano, aún cuando los productores y las productoras, junto al Ejecutivo Nacional, hacen un gran esfuerzo por asegurar la disponibilidad del rubro, de gran calidad y a precio justo;

Por cuanto, el Estado Venezolano, dentro del contexto de la política agrícola nacional, ha efectuado importantes inversiones a través de sus planes de desarrollo y producción agrícola de cacao, incrementando la superficie de siembra y el apoyo al productor y la productora, resultando buena parte de estas inversiones en el enriquecimiento particular de poderosos grupos económicos responsables de la comercialización de productos de cacao, que establecen márgenes de ganancia exorbitantes a través de la merma de los beneficios justos que corresponden al trabajador del campo, faltando así la agroindustria privada a su responsabilidad social como demandante de materia prima de origen agrícola y proveedora de bienes de consumo intermedio y final,

De conformidad con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 77, numerales 1 y 27 del Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en el artículo 20, numeral 4 del Decreto No. 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria; artículo 5 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 2.304 de fecha 5 de febrero

de 2003, mediante el cual se determinan los Bienes y Servicios de Primera Necesidad en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.626, de fecha 6 de febrero de 2003; así como con lo dispuesto en el Decreto No. 8.157, de fecha 12 de abril de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.655, de fecha 13 de abril de 2011, mediante el cual se declara el rubro Cacao como estratégico para la alimentación del pueblo venezolano y el desarrollo rural integral de la Nación; y en concordancia con lo estipulado en los artículos 11 numerales 1 y 11, 14 numerales 1 y 18, y 26 numerales 1 y 11 del Decreto No. 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.202 de fecha 17 de junio de 2009,

Estos Despachos dictan la siguiente,

RESOLUCIÓN QUE FIJA EL PRECIO MÍNIMO DEL CACAO DE PRODUCCIÓN NACIONAL, PAGADO AL PRODUCTOR PRIMARIO

Artículo 1. Se fija el precio mínimo del cacao en grano, pagado al productor primario en todo el territorio nacional, colocado en los sitios de recepción habitual, en los siguientes términos:

F-1: Cacao Fino de Primera	25,00
F-2: Cacao Fino de Segunda	20,00

A los efectos de la presente Resolución, se entiende por sitio de recepción habitual, el lugar o establecimiento en el cual el productor entregue o consigne el cacao, a los fines de su acopio e industrialización.

Artículo 2. El precio establecido en el Artículo 1 de esta Resolución será pagado al productor primario en un plazo en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días continuos, contado a partir de la entrega de la cosecha de cacao en los sitios habituales de recepción.

En los casos en que el sitio de recepción sea diferente al sitio habitual, el pago por concepto de flete correrá por cuenta de la agroindustria.

Las condiciones de entrega, la forma de pago, descuento y bonificación por calidad, según las normas establecidas, serán convenidas entre el productor y la agroindustria.

Artículo 3. Las calidades de cacao a que refiere el Artículo 1 de la presente Resolución se determinan de la siguiente forma:

- F-1: Cacao Fino de Primera:** Es el cacao formado por granos de cacao que han sido sometidos al proceso de fermentación, exentos de olores extraños al olor característico de este grano y de cualquier otro signo de adulteración.
- Cacao Fino de Segunda:** Es el cacao formado por un lote de granos de cacao cuyo grado de fermentación sea, como mínimo, veinte por ciento (20%), exentos de olores extraños al olor característico de este grano y de cualquier otro signo de adulteración.

Artículo 4. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras podrá establecer las normas de comercialización dirigidas a optimizar los mecanismos de colocación y financiamiento del rubro cuyo precio mínimo pagado al productor primario se regula mediante la presente Resolución.

Artículo 5. A los fines del seguimiento y control de lo dispuesto en la presente Resolución, se crea una Comisión Interdisciplinaria, la cual apoyará las labores de inspección y fiscalización de la observancia por parte de la agroindustria de

los precios mínimos aquí fijados, llevadas a cabo por el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP).

La Comisión a que refiere el encabezado del presente artículo estará conformada por representantes del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, del Consejo del Poder Popular de Productores y Productoras Socialistas del Cacao Venezolano y la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, S.A.

Artículo 6. Quienes infrinjan esta Resolución, o incurran en los ilícitos económicos, administrativos y los delitos de especulación, acaparamiento, usura, boicot, restrinjan la circulación, distribución o comercialización, no presten de manera continua e ininterrumpida los servicios públicos esenciales respecto al rubro señalado en esta Resolución, o se nieguen a la venta, realicen prácticas evasivas de cualquier naturaleza y otros delitos conexos para no cumplir con los precios del rubro indicado en el Artículo 1 de esta Resolución, serán sancionados conforme con lo establecido en el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, pudiendo ser objeto del inicio del procedimiento expropiatorio por causa de utilidad pública e interés social, así como de la aplicación de las medidas preventivas de operatividad temporal e incautación mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional. Sin perjuicio de las competencias que correspondan sobre el particular a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), conforme a lo establecido en el Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.

De igual forma, se aplicará lo previsto en el Decreto No. 6.071, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

Artículo 7. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, quedan sin efecto los precios mínimos pagados al productor primario para el rubro cacao, fijados por el Ejecutivo Nacional en Resoluciones anteriores a ésta.

Artículo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Ministro del Poder Popular
para el Comercio

ELÍAS JAUA MILANO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (E)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO
Ministro del Poder Popular
para la Alimentación

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Caracas, 14 de diciembre de 2011
200° y 151°

AUTO DECISORIO
EXPEDIENTE N° 002-06

CAPÍTULO I NARRATIVA

A. DE LOS HECHOS

Como consecuencia de los resultados contenidos en el Informe de actuación fiscal de fecha 28 de octubre de 2005, realizada en el Instituto Universitario de Tecnología

"Jacinto Navarro Vallenilla" ubicado en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, y en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, esta Coordinación de Determinación de Responsabilidades Administrativas, adscrita a la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), mediante Auto de Inicio de fecha 12 de septiembre de 2011 inserto en el presente expediente, inició las actuaciones necesarias orientadas a verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones ocurridos por parte de los miembros de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto educativo en referencia, en la contratación de los servicios de la empresa OCHUN TOURS, C.A., para la realización del Plan Vacacional 2005 para el personal obrero establecido en el Contrato Colectivo, por CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 119.098.000,00).

Cabe agregar que este Órgano de Control Fiscal, dejó constancia de las actuaciones e investigaciones realizadas, en Informe de Resultados de fecha 15 de abril de 2011, iniciándose el procedimiento de Determinación de Responsabilidades mediante Auto de fecha 12 de septiembre de 2011, los cuales tienen insertos a los folios 333 al 356 y del 364 al 380, respectivamente, concluyéndose que existen méritos suficientes para dicho Procedimiento Administrativo, previsto en el Capítulo IV, Título III, de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Realizadas las actuaciones de conformidad al derecho y desarrollada la Potestad Investigativa que confiere el artículo 77 *ejusdem* a los Órganos de Control Fiscal, se concluyó en el mencionado Informe de Resultados de fecha 15 de abril de 2011, la presunción de que los integrantes de la Comisión de *merras* subsumen sus actos, hechos u omisiones en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa consagrados en el artículo 91 numerales 2, 3, 7 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

La Coordinación de Determinación de Responsabilidad Administrativa, adscrita a la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del MPPEU, inició el presente procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades, imposición de Multa y formulación de Reparo, si fuese el caso, mediante Auto de Apertura de fecha 12 de septiembre de 2011, a los miembros de la Comisión de Modernización y Transformación del IUT "Jacinto Navarro Vallenilla", ubicado en la Ciudad de Carúpano, estado Sucre, para el momento de la ocurrencia de los hechos, ciudadanos (as) EUCLIDES SALAZAR HURTADO, titular de la Cédula de identidad N° V-3.700.992, Coordinador de la Comisión y LUISA MERCEDES MARTÍNEZ CAMPOS, titular de la cédula de identidad N° V-4.584.198, con funciones de Sub Directora Administrativa, nombrados según Resolución N° 37 de fecha 14/02/01, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.142 de fecha 16/02/01, por haber autorizado el egreso antes especificado, así como haberlo hecho efectivo al firmar el cheque con el cual se efectuó la cancelación.

Dicho Auto les fue notificado mediante comunicaciones N° OAI-2011-828, de fecha 30 de septiembre de 2011, recibida el 13 de octubre de 2011 y N° OAI-2011-827 del 30 de septiembre de 2011 y recibida el 18 de octubre de 2011, respectivamente, determinándose los actos, hechos u omisiones que a continuación se indican:

Único: Presunta actuación negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, toda vez que se efectuó la evaluación, selección y contratación de los servicios de la empresa Ochun Tours, C.A. por parte de la Comisión de Coordinación de Modernización y Transformación del IUT "Jacinto Navarro Vallenilla", por la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 119.098.000,00), equivalentes en la actualidad, conforme a las reglas de reconversión monetaria, a CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 119.098,00), cancelándose a la mencionada compañía, por anticipado, la cantidad de CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 101.233.300,00), equivalentes en la actualidad a CIENTO UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 101.233,30), mediante cheque N° 00014848, de fecha 12 de agosto de 2005, correspondiente a la cuenta corriente N° 003-0052-78-0001011692 que mantenía la institución en el Banco Industrial de Venezuela. Dicha cancelación se efectuó sin que la institución le solicitara a la empresa la garantía de Fianza de Anticipo por el total del anticipo otorgado, la cual tiene por objeto restituir al beneficiario de la fianza, en caso de incumplimiento por parte del afianzado, parte o la totalidad de las cantidades que el afianzado haya recibido de la institución en el momento de la firma del contrato. En tal sentido, la cláusula 5 del referido contrato, solo estipuló una retención de un porcentaje del 10% y 5%, para un total de un 15%, por fiel cumplimiento y mantenimiento de la oferta,